

IMPRIMIR ARTICULO

PROVINCIA

EDICIÓN IMPRESA

## PROVINCIA ALICANTE

VILLENA / Los regantes rechazan que se grave el uso del agua y anuncian que no pagarán «ni un duro»

EFE/VILLENA

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) mostró ayer su rechazo a la propuesta del Gobierno de gravar el uso del agua para regadío con el fin de paliar el déficit hídrico y aseguró que sus usuarios no pagarán «ni un duro por el agua en sí misma».



El presidente de Fecoreva, José Pascual, hizo estas declaraciones en el municipio alicantino de Villena, donde esta federación mantuvo una reunión de trabajo para abordar la situación hídrica de la Comunidad, la nueva propuesta del Gobierno y la modificación de la Ley de Aguas.

Publicidad

Pascual, que estuvo acompañado por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Alta, Andrés Martínez, dijo que la propuesta del Gobierno central de gravar el agua para regadío o para uso industrial con nuevos cánones o impuestos es algo «injusto» e «inaceptable» para los regantes.

Recordó que los usuarios pagan «los embalses, los canales y todas las obras que son necesarias para el transporte del agua a sus campos, pero no estamos jamás dispuestos a pagar un duro por el agua en sí misma. El agua es pública y no tiene propietario».

El presidente de Fecoreva expuso que la principal preocupación de los regantes es «la situación hídrica» que existe en la Comunidad, donde se ha llegado «al límite». Para ello, puso como ejemplo que desde algunas confederaciones hidrográficas se haya ordenado «que se deje de regar» o se hayan establecido «una serie de restricciones graves a todo el regadío».

En ese sentido, acusó a la Administración central, de la que dependen las confederaciones, de no tomar «las medidas para mitigar de forma global este problema», y dijo que para los regantes «la única forma de lograrlo sería el trasvase del Ebro».

Por su parte, Martínez se refirió a la modificación de la Ley de Aguas, que es una transposición de la Directiva Marco del Agua, y criticó que el Gobierno haya introducido unas cuestiones en los últimos quince días que no se han tratado en los dos años de consultas.

En su opinión, «estas prisas» responden «más a la necesidad de cumplir con un compromiso electoral, que a la de realizar una ley que merezca la pena», al tiempo que afirmó que, aunque su articulado «no está mal», la mayor participación de los regantes que en teoría se contempla, «en la práctica no se consigue», puesto que «se les expulsa de los órganos de decisión».